que buscan los estudiantes, tal vez los abogados y jueces que consulten el libro buscando un criterio para solucionar un caso complejo, agradecerán la literalidad y el detalle con el que se exponen.

HERNÁN CORRAL TALCIANI

FRANCISCO LETURIA (ED.),
*JUSTICIA CIVIL Y COMERCIAL:
UNA REFORMA ¿CERCANA?*, SAN-
TIAGO, EDICIONES LYD, 2011,
536 pp.

¿Nos acerca la tan ansiada reforma de los procedimientos civiles a una efectiva *justicia* civil y comercial? Ésta es la interrogante que se pone de relieve con el sugerente título de la obra reseñada.

Mediante las contribuciones de veintiún académicos e investigadores, la propuesta plasmada en este libro cambiar el paradigma de análisis de la reforma procesal; ya no centrándose en aspectos formales de la misma, sino atendiendo a su sustento y fondo. Así, a lo largo de cuatro secciones, se abordan bases fundamentales, la prueba en el proceso civil, el régimen de recursos y otras dimensiones de relevancia para la justicia civil.

En lo que respecta al apartado referido a las bases fundamentales de la reforma, se presentan como ejes centrales del proceso –y del Derecho

Procesal mismo, por cierto– las garantías procesales. En el primero de los cuatro artículos que componen este capítulo se discurre en torno a la idea de garantismo procesal como metodología de base para el estudio del Derecho Procesal, enfoque que permite dotar a esta disciplina de sistematicidad, autonomía y sustantividad. De esta forma, se vislumbra un quiebre en la visión eminentemente procedimental y formalista de esta rama del Derecho y se sienta la directriz del resto de los artículos del texto.

El siguiente aporte aborda el controvertido sistema de prácticas de egresados de Derecho y la figura del abogado de turno. Sobre el particular, se evidencian algunas deficiencias del actual esquema de asistencia legal gratuita y su pugna con la garantía de acceso a una justicia efectiva y oportuna. En reemplazo, los autores sugieren considerar la posibilidad de recurrir a la técnica de *voucher* o subsidio portable a favor del litigante de escasos recursos, de manera que sean licitados los servicios de defensa jurídica, procurando mayores incentivos para los abogados y una mejor calidad de servicio para los usuarios.

Siguiendo con la temática de este capítulo, el tercer título versa sobre la dualidad entre la doctrina garantista y activista procesal, que se identifican, respectivamente, con el sistema acusatorio e inquisitivo. El autor indaga la compatibilidad o incompatibilidad de ambos sistemas en el contexto de un mismo ordenamiento. Uno de los aspectos que

llama la atención de este artículo es la conclusión de su autor: ninguna de las dos realidades representa un verdadero dogma jurídico. Ello, lisa y llanamente, debido a que no han sido elevados a tal calidad por la comunidad científica. Interesante habría sido indagar en si dicha situación resulta de una dócil sumisión a un régimen en el que conviven ambas doctrinas, sin cuestionamiento alguno o si, por el contrario, existe una real contradicción que amerita revisión.

Para dar cierre a las bases, se plantea en el cuarto artículo la necesidad de una reforma focalizada en la prevención del conflicto civil, con énfasis en los valores y el comportamiento ético de todos los involucrados, en el acceso a la información y a la generación de estímulos a la desjudicialización; todos ellos factores que, atendido su escaso desarrollo, son sindicados como causas de la lentitud de los procesos y de la excesiva carga de trabajo que recae en los jueces y, en definitiva, de un sistema de administración de justicia bastante deficiente.

En el segundo capítulo, dividido en siete artículos, destinados a la prueba, se someten a estudio la producción, presentación y valoración de la misma, a la luz de las reglas de la sana crítica. En efecto, y en armonía con sus símiles previos penal, de familia y laboral, una de las innovaciones más llamativas introducidas por la reforma es el estándar probatorio o de convicción que debe alcanzar el tribunal para dictar su fallo. Sin

embargo, este nuevo modelo de apreciación de la suficiencia de la prueba, origina algunas inquietudes en cuanto a sus márgenes de error tolerables; en torno a los costos sociales de la pretensión de dar por establecida una verdad absoluta e incontrovertible, y; respecto de su indisoluble vínculo con el deber del sentenciador de fundamentar su fallo.

En este orden de ideas, se sostiene la necesidad de ahondar en el desarrollo legislativo de ciertos medios probatorios en particular, como en el caso de la prueba pericial y en la declaración de parte. En el esquema del sistema de audiencias instaurado por la reforma, se hace indispensable una elevación de los estándares de admisibilidad del informe de peritos, puesto que el informe o dictamen escrito como medio de prueba será reemplazado por el perito mismo. De manera análoga, la declaración de parte supone también que el pliego de absoluciones constitutivo de prueba es suplido por la parte misma, siendo conveniente que se admita de manera expresa la declaración *voluntaria*, sobre la cual el legislador guarda silencio.

También son sometidas a escrutinio las facultades probatorias oficiosas que son conferidas al juez en el contexto de la reforma, en orden a esclarecer su extensión, su legitimidad bajo la óptica del principio dispositivo y los alcances de un control de la valoración probatoria en el sistema de la sana crítica, por parte de los tribunales superiores de justicia en relación con los principios

formativos inmediación, oralidad y publicidad.

Los cinco artículos que integran el tercer capítulo de esta obra, se centran en el régimen recursivo de la reforma. El quid de esta sección radica en el cuestionamiento de la idea de un sistema de impugnación como *conditio sine qua non* de un debido proceso. En este sentido, el primer artículo despliega un análisis del marco normativo internacional aplicable a este problema, planteando una respuesta dubitativa al mismo, sugiriendo, además, un desplazamiento del eje de estudio hacia el papel de los recursos como un mecanismo de unificación de las decisiones judiciales, propicio para proporcionar información a los usuarios del sistema de administración de justicia del razonamiento tentativo de los tribunales.

Continuando con esta idea, los siguientes acápite del tercer capítulo profundizan en el papel unificador de los medios de impugnación y enmienda, y de manera particular, en relación con el recurso extraordinario, de competencia de la Corte Suprema, que permite anular sentencias notoriamente injustas para el recurrente o cuyo pronunciamiento vulnera garantías constitucionales, cuando a juicio de a lo menos tres miembros de la Corte dichas sentencias revistan un interés público. Sin desconocer las ventajas y desventajas de esta importación originaria del sistema anglosajón de naturaleza anulatoria, los autores manifiestan reservas respecto del aporte de este recurso en términos de fomentar y

fiscalizar la correcta aplicación del derecho.

Los dos apartados finales del capítulo en comento, tienen relación con la doble instancia y su incompatibilidad con los principios de oralidad, inmediación y concentración, toda vez que, tal como se ha concebido en la reforma, se impide una apreciación directa por parte del tribunal superior de los supuestos fácticos y de los medios probatorios en que se funda el fallo de primera instancia. En función de tales consideraciones, el abanico de propuestas abarca desde la reestructuración completa de la apelación, totalmente renovadora de la instancia; pasando por la restricción de las causales del recurso; hasta llegar a su absoluta supresión y reemplazo.

Para terminar, se presenta un último capítulo que pudiera denominarse misceláneo y que comprende diversas dimensiones de relevancia para la justicia civil. Así, la introducción a este cuarto capítulo es dada por una revisión de las medidas prejudiciales, preparatorias y probatorias, y de las medidas cautelares, conservativas y anticipativas, a la luz del articulado del proyecto, en torno a sus requisitos, objetivos y tramitación. Se destaca la contribución de la regulación pormenorizada de esta materia, de manera somera legisladas en la actualidad, como también el gran avance que constituye la posibilidad de discutir la procedencia y duración de tales medidas en una audiencia pública.

En relación con el estudio de los mecanismos de tutela, el siguiente

aporte está enfocado en la figura del oficial de ejecución, como propuesta modificadora tendiente a la descongestión del sistema, en virtud de la cual la ejecución en sede judicial es sustituida por una gestión íntegramente administrativa (en la medida que no exista oposición del ejecutado), que no requiere del patrocinio de un abogado y que permite soslayar los cuestionamientos de constitucionalidad del actual procedimiento ejecutivo.

A partir de las disquisiciones planteadas en el artículo anterior, la tercera división del capítulo cuarto contiene una propuesta de reforma al sistema de concesiones mineras. De esta manera, se realiza una revisión crítica del procedimiento de constitución de propiedad minera y se propone la instauración de una concesión minera única, otorgada mediante un acto administrativo expedido conforme a criterios de publicidad, legalidad y oficialidad. En general, la enmienda sugerida se inspira en la necesidad de descongestionar el sistema judicial y de optimizar el uso de las nuevas tecnologías, advirtiendo que el establecimiento de la cuadrícula cartográfica preestablecida, como unidad única de medida de la concesión minera, es idónea para evitar las superposiciones mineras, con lo cual se contribuye a la certeza jurídica.

Para concluir, el capítulo final culmina con un ensayo que versa sobre la enseñanza del Derecho en el siglo XXI. Aunque esta inserción pueda parecer paradójica en aten-

ción a los contenidos previamente expuestos, termina siendo un cierre acertado, en la medida que todas las propuestas y reflexiones vertidas en el resto de los artículos, sólo cobra sentido si esta reforma cuenta con futuros operadores y usuarios cuya mirada se centre en el respeto y promoción de las garantías procesales. Para ello, la propuesta es focalizar los esfuerzos en los objetivos esperados, una evaluación acorde con dichas expectativas y una docencia más amigable para con los estudiantes.

Si bien no todos los temas antes referidos son examinados de forma exhaustiva –de hecho, en algunos casos, reciben un tratamiento superficial o quedan abiertos– esta obra permite constatar el pragmatismo característico del jurista contemporáneo, centrado en la litigación y en el resultado, reflejado en la concepción tradicional del Derecho Procesal como una disciplina reguladora de procedimientos y tribunales. Asimismo, expone las patentes inconsistencias entre aquella concepción con la garantía de un debido proceso y de acceso a la justicia.

Resulta atractiva la coherencia y armonía con que este conjunto de autores ha logrado desarrollar sus planteamientos en una obra cuyo núcleo converge en la justicia, la misma justicia que la ciencia del Derecho anhela, pero que en lo usual no presenta mayor interés para la investigación jurídica contemporánea.

Estemos de acuerdo o no con los planteamientos vertidos en el texto, lo cierto es que invita a refle-

xionar sobre ciertos elementos de la estructura del sistema chileno de administración de justicia que, normalmente, son admitidos como válidos y eficaces, sin mayor reparo. En este sentido, lo más valioso de este trabajo es su aporte en orden

a fomentar el debate y el análisis crítico en torno a nuestro sistema de administración de justicia, sus instituciones y ejes filosóficos.

VIVIANA PONCE DE LEÓN SOLÍS